

## Editorial

## Última hora lunes 7 de febrero 2000

## En defensa de la Universidad

Alejandro Cravioto, Manuel Quijano

Aun cuando estas líneas se leerán a finales del mes, los acontecimientos ocurridos en Ciudad Universitaria el día de ayer, ameritan un comentario... que será tan solo la continuidad de nuestro pensamiento expresado en los editoriales aparecidos en la Revista desde abril de 1999. Una opinión que puede considerarse universal ahora, tanto entre universitarios como en la sociedad civil es que el paro en la UNAM tuvo una etiología "política" y utilizó como pretexto el aumento de cuotas —muy generoso, por otra parte, pues se aplicaba sólo a los que pudieran solventarlo—. Después, para ocultar sus fines, se le agregaron peticiones populistas como el regreso al pase automático o la no evaluación por instancias autónomas como el Ceneval, sólo para prolongar el conflicto (pues era ésta la consigna de los misteriosos asesores políticos o de algunos que, por convicción, parecían apoyar el paro). Además actuaban las postizas manifestaciones de que la juventud quiere siempre cambiar el mundo, de los clichés político-progresistas, y la búsqueda de apoyo por organizaciones populares de nombres conocidos y del EZLN.

Al paso de los meses el hecho real era el secuestro de las instalaciones de enseñanza, investigación y difusión de la cultura que son las funciones substantivas de la Universidad y la decisión de sabotear cualquier intento de arreglo por la vía del diálogo.

Lo ocurrido en la Preparatoria 3 fue claramente explicado: el grupo pequeño del Consejo General de Huelga (CGH) que la ocupaba decidió entregarla a los alumnos opuestos a continuar el paro y éstos informaron a las autoridades universitarias quienes enviaron al cuerpo de vigilancia con un notario para realizar una inspección y hacerse cargo del inmueble, como había ocurrido días antes en la Escuela de Enfermería y Obstetricia y en las oficinas centrales de la Preparatoria. Pero avisados los del CGH reclutaron contingentes para recuperarla, cosa que lograron: forzaron la puerta y entraron a golpear salvajemente a los 10 vigilantes que habían quedado para resguardar el plantel, pues los estudiantes antiparistas y otros funcionarios habían abandonado el inmueble por el acceso trasero. Antes y durante esos sucesos, la rectoría pidió por seis veces la intervención de la policía del DF para evitar la

violencia y, al no tener respuesta, recurrió a la Procuraduría quien envió a la Policía Federal Preventiva. El viernes 4, tres días después, el Rector llamó a los paristas a dialogar y acudió personalmente al Palacio de la Medicina en Santo Domingo para discutir la terminación del conflicto; pero a pesar de permanecer ahí hasta la media noche no logró la mínima disposición de arreglo.

El domingo 6, las fuerzas públicas entraron a Ciudad Universitaria. El Rector no lo solicitó —como se creía iba a ser la exigencia del gobierno federal—, sino fue decisión de una Juez de Distrito, en vista de las demandas y quejas interpuestas con anterioridad. El desalojo, realizado con gran eficacia, sin heridos y con movimientos precisos (casi quirúrgicos), fue recibido por la gran opinión pública, por la sociedad civil con un respiro, como un acto *necesario*. Sólo políticos de partidos de oposición o algunos otros, candidatos a puestos de elección creyendo que con ello ganan simpatías, lamentaron el hecho o lo reprobaron y sólo a regañadientes admitieron que la medida era lo último que quedaba por hacer. Debe añadirse que hay también universitarios que, en actitud demasiado sentimental, sienten mancillada su casa y se rebelan ante la presencia de la policía. Los médicos, acostumbrados a tomar decisiones, a veces dolorosas, no podemos solidarizarnos con esa actitud.

No puede echarse al olvido que, además de secuestrar nuestras instalaciones, profanar el suelo universitario con gente extraña, tener una actitud prepotente, altanera y ofensiva para la comisión de diálogo, algunos miembros del CGH cometieron delitos del orden común como robo, destrucción en sus propias escuelas (pudo apreciarse tristemente en los múltiples reportajes televisivos del domingo en la noche) y que pretendían seguir impidiendo a los estudiantes deseosos de trabajar que pudieran realizarlo.

Hay supuestos augures, analistas políticos, que aseguran que la reconciliación será imposible y que la Universidad deberá cambiar radicalmente hasta perder sentido el espíritu que hablaría por la Raza. No lo creemos: el diálogo se restablecerá pero ahora en el Congreso, para la organización del cual se pondrá especial atención que los representantes de académicos, estudiantes y administrativos sean eso precisamente y no

querellantes de oficio. En el Congreso de 1991, la única innovación fue la creación de Consejos de Área, cuya actividad ha sido de muy dudosa utilidad académica. En el próximo a celebrarse se buscará elevar el nivel académico como primer objetivo y, con seguridad, NO se modificará el reglamento de inscripciones y no se dará entrada al pase automático o a la posibilidad de convertirse en fósil. Es posible que se gaste mucha saliva en querer desaparecer la Junta de Gobierno y la forma de elección del Consejo Universitario... dízque en bien de la democratización y el espejismo del voto universal, fácilmente manipulable.

De cualquier manera bienvenido el Congreso que, repetimos, es la reanudación del diálogo, instrumento universitario por excelencia, al que desde siempre han invitado las autoridades de la UNAM y que ahora "exigen" los críticos de dentro y de fuera.

Pero en fin, se han recuperado al menos físicamente las escuelas y facultades y con seguridad, dentro de dos semanas las ocuparán los verdaderos universitarios, se reiniciará el trabajo, la convivencia, la creatividad, la tolerancia y se olvidarán agravios. No obstante, nos queda por sufrir una temporada de crítica a las autoridades universitarias de parte de los sentimentales que consideran profanado su suelo por haber "permitido" que entrara la policía y no exigir (?) su inmediato retiro. Olvidan demasiado aprisa la organización y realización de un plebiscito limpio y transparente, verdaderamente democrático, ejemplo único en la historia del país, en que el

90% de la comunidad universitaria decidió que el paro debía terminar. Olvidan también demasiado aprisa la actitud particularmente valiente del Rector asistiendo a Ciudad Universitaria para entregar el resultado de esa jornada, y la actitud particularmente sensata de él mismo al invitar el viernes 4 de febrero a un último intento de arreglo negociado.

La Facultad de Medicina ha tenido un desempeño ejemplar en todo el conflicto; desde la semana siguiente al cierre de la escuela, organizó la continuidad de sus labores de investigación y docencia con clases extramuros para los alumnos de primero y segundo en múltiples sedes proporcionados por los hospitales donde se atienden a los de años superiores, con grupos fijos, paso de lista, profesores estables, exámenes parciales departamentales etc.; sólo disminuyó la enseñanza de las prácticas que, en los próximos tres meses se regularizarán. Ni qué decir que la enseñanza de especialidades, maestrías y doctorados continuó sin contratiempos.

En el plebiscito contribuyó nuestra facultad con cifras superiores a otras dependencias: 2,000 de 2,700 académicos (profesores, investigadores, técnicos); 700 de 1,000 empleados de confianza o sindicalizados; 7,000 de aproximadamente 11,000 estudiantes, un total de 10,000 votantes y el 90% del total aprobaron la propuesta de la rectoría y estuvieron de acuerdo en que el paro debía terminar.

Ahora la Facultad pondrá, con seguridad, nuevamente el ejemplo regularizando las actividades, contribuyendo a la unidad de los universitarios y fortaleciendo la comunidad.